

Construir el Uruguay 2030

El nuevo impulso progresista para el desarrollo democrático con justicia social

Nos encontramos en un momento fundamental del período y de la etapa histórica, en la que se definirá el avance del proceso de cambio progresista o la regresión conservadora impulsada por los sectores desplazados del gobierno en 2005.

La disputa democrática la ganará quien tenga la capacidad de construir una mayoría ciudadana comprometida con un imaginario de futuro posible, superador, creíble y esperanzador a nivel individual y colectivo, expresado en un proyecto concreto que demuestre ser capaz, a la vez, de impulsar nuevos avances económicos, sociales y culturales con perspectiva de progreso a mediano plazo, y atender en forma inmediata algunas preocupaciones fundamentales de la población que reclaman soluciones.

En ese sentido el objetivo fundamental que debemos encarar a corto plazo es retomar la iniciativa política en torno a cinco ejes fundamentales:

1. la disputa de la agenda con respuestas a las demandas planteadas e iniciativas del gobierno, incluyendo la autocrítica y lo que resta por hacer, considerándolos en el marco de los desafíos para un 4° gobierno del Frente Amplio.
2. el debate con la derecha sobre las contradicciones de sus propuestas, las consecuencias de la aplicación de su programa para la mayoría de la población, y las debilidades de su gestión presente y pasada;
3. la propuesta de una nueva generación de reformas que suponga un nuevo impulso progresista en el país hacia un Uruguay 2030 más productivo y solidario, justo e innovador, más seguro y sustentable, con más trabajo y cultura, con más derechos y educación, con más democracia, mejor inserción en el mundo e integración con la región, con oportunidades para todo el país incluyendo descentralización, infraestructura y oportunidades para el interior, y para todo ello articulando crecimiento con transformación productiva, redistribución y acceso a bienes públicos para la población;
4. la definición junto al programa, de la candidatura presidencial que nos permita cerrar filas en torno a una propuesta y trabajarla el mayor tiempo posible con la ciudadanía.
5. y fortalecer el relacionamiento con la base social frenteamplista a través de los mecanismos clásicos de participación y de las nuevas tecnologías de comunicación.

A nivel sectorial se suma a ello la necesidad de asumir como objetivos:

1. recobrar la existencia política con voz propia en la coyuntura y de cara al ciclo electoral que se traduzca en la obtención de representación parlamentaria;
2. ampliar los niveles de participación y organización en torno a una propuesta;
3. definir una estrategia de acumulación electoral y un plan de actividades que se inicie cuanto antes, para compensar con tiempo de trabajo, acumulación y novedad el diferencial de recursos de otras propuestas;
4. contribuir decididamente al fortalecimiento de la unidad de acción del Frente Amplio, a la gestión de nuestros gobiernos- nacional y departamentales -, y a la elaboración programática de cara al cuarto período progresista en el Uruguay.

Con esa perspectiva, el Congreso de la Vertiente Artiguista debe significar un punto de inflexión e inicio de una nueva etapa de trabajo. Para ello deberemos adoptar decisiones políticas claras sobre los puntos fundamentales para encarar la etapa que se abrió en el segundo semestre de 2018, conscientes de que en tiempos políticos el período que nos separa de la elección interna, con el verano en el medio, es realmente breve.

Uruguay en la región y en el mundo

La llegada y permanencia de las fuerzas progresistas al gobierno con el apoyo de un bloque social favorable a los cambios, produjo un avance incuestionable en el desempeño económico, las condiciones de vida y la proyección del país. Como se ha señalado a nivel internacional Uruguay es en la actualidad de los pocos países en el mundo que ostenta el cumplimiento de cuatro condiciones fundamentales de progreso: un crecimiento sostenido en la última década; haber reducido sustancialmente la pobreza; haber disminuido la desigualdad social; y haber producido esos logros en un entorno de libertades plenamente vigentes, con elecciones libres y amplio respeto a los derechos humanos.

No obstante ello, el impacto de los cambios en las condiciones económicas y políticas externas, sumado a aspectos de política interna preocupantes, nos plantean un escenario con dificultades y desafíos reales para la continuidad del proyecto progresista en el país, los que debemos superar con audacia, autocrítica y compromiso en el nuevo escenario planteado.

El contexto internacional y regional, analizado en el documento presentando a la Directiva Nacional, está caracterizado por una ofensiva conservadora y una contraofensiva en América tendiente a desmontar los avances económicos, sociales, culturales y políticos de la era progresista en la región. Las drásticas consecuencias del triunfo del proyecto conservador para la mayoría de la población en Argentina y Brasil, y el triunfo del progresismo en México plantean posibles alternativas, pero la radicalidad del proceso contra Lula en el sur, así como el retroceso en el Norte en

cuestiones clave como la política comercial, migratoria, el relacionamiento con Cuba, etc., muestra la magnitud del embate conservador en la etapa.

En particular Uruguay presenta una coyuntura también marcada por la iniciativa política y social del bloque conservador, pero a la vez, por las contradicciones sociales y políticas al interior del movimiento popular (amplificadas por la disputa presupuestal), el perfilismo sectorial y el debilitamiento de la unidad de acción del Frente Amplio, y las fortalezas y las debilidades de nuestra gestión al frente del gobierno nacional.

Se registra en concreto, la ofensiva del denominado movimiento de “autoconvocados” bajo la consigna de “Un solo Uruguay”, que no obstante ya ha sido promovida como expresión electoral a la interna del Partido Nacional y se ha presentado como la expresión de un movimiento social con amplia difusión a través de los medios de comunicación. Pese a ese pretendido carácter apolítico partidario, levanta una plataforma de confrontación con la globalidad del programa y la gestión del actual gobierno progresista, pretendiendo canalizar y amplificar su cuestionamiento.

En ese marco se plantea además reinstalar la contradicción campo-ciudad, ya ensayada contra otros impulsos de reformas progresistas en el pasado, promovida por el sector rural de mayor poder económico para nada representativo de los intereses de las grandes mayorías de uruguayas y uruguayos del interior del país, pero con capacidad de generación de opinión sobre ellas.

A nivel ciudadano se registra un crecimiento, a nivel de opinión pública pero también con expresiones de protesta social, de la preocupación en torno al tema de la inseguridad. Ello ha tenido una pronta reacción del Presidente de la República, pero la misma debe ser acompañada de acciones decididas y medidas concretas por parte de todo el gobierno en conjunto con la fuerza política, con el objetivo de dar respuestas con la mayor firmeza ante esta realidad y la sensibilidad social generada, sin que ello signifique desconocer los esfuerzos y avances concretados en la gestión, ni la necesidad de continuar encarando las condicionantes sociales que están en la base de la expansión del delito heredada por el gobierno progresista y sus nuevas características, desarrolladas en estos años durante nuestra gestión.

Tampoco significa dejar de cuestionar las posturas reaccionarias y demagógicas que carentes de respuestas significativas para el problema hacen un uso político del mismo, o promueven una política que ya fracasó en el pasado cuando tuvieron la responsabilidad de la gestión. La campaña de recolección de firmas emprendida sobre el tema es una muestra más de su uso político como único recurso al que machaconamente puede apelar la oposición para intentar deslegitimar nuestro gobierno. No obstante ello, debemos mejorar, ser intransigentes con el problema que está golpeando duro a los que menos tienen, y no subestimar el alcance de la expresión social de la preocupación por la seguridad ciudadana, lo que sería un error con consecuencias para la suerte de las posibilidades de continuar encarando esa realidad estructural de nuestra sociedad.

En la última etapa se evidencia también un aumento justificado en la preocupación por el empleo, por la disminución del ritmo de creación de puestos de trabajo, lo que debe

ser priorizado en las respuestas a procesarse en la asignación de recursos y definición de políticas en la etapa final de nuestra administración de gobierno con políticas activas y el impulso de la inversión incluyendo la pública. Junto a ello, si bien a nivel de gobierno se le ha dado adecuada respuesta, aparece como un tema que también amerita seguimiento, la evolución de la cotización del dólar por su impacto en el poder adquisitivo de las familias.

Adicionalmente, las definiciones adoptadas sobre la política presupuestal, que establecieron la asignación de los recursos para el período en dos etapas en sustitución de la tradicional definición de un presupuesto quinquenal, ubican al 2018 como un nuevo año de fuerte disputa por la asignación de los dineros públicos, la cual coincide con el año en el que se registra la mayor ronda de consejo de salarios. Ello determina que la coyuntura se caracterice también por mayor conflictividad, ante la cual deberán adoptarse definiciones que atiendan las variables macroeconómicas, en un contexto de valoración política ajustada a los compromisos del programa, la perspectiva estratégica de privilegiar el mantenimiento y la ampliación de la base social del proyecto definido como “bloque social de los cambios”, y los objetivos políticos de la etapa.

Frente Amplio

Ética y Valores de Ayer, Propuesta y Renovación del Mañana

Debemos considerar además, entre los aspectos políticos relevantes de la etapa, la reaparición y desarrollo de un sentimiento “anti-político” en parte del electorado que algunos relevamientos de opinión pública ubican en el entorno del 10% del total de la ciudadanía. Esto está acompañado por la existencia en el interior del electorado progresista de un sector de “desencantados” con el Frente Amplio como fuerza política y de gobierno. Debemos hacernos cargo de ello, ya que si bien es consecuencia de una prédica sistemática de desprestigio de lo político por parte de sectores de la derecha que buscan igualar a las fuerzas progresistas con los partidos tradicionales minando su prestigio, alentando un “son todos iguales” que es funcional al bloqueo de cualquier cambio del statu quo; todo ello también es resultado de importantes errores cometidos al interior del Frente Amplio, tanto en temas de conducta política como de definiciones que hemos asumido como fuerza de gobierno, de las cuales la declaratoria de esencialidad en la enseñanza es un ejemplo de ello.

En ese sentido, no podemos soslayar el impacto negativo que han tenido en la etapa las denuncias de inconductas en el manejo de fondos públicos, su manejo en los grandes medios de comunicación, las dificultades de adoptar un posicionamiento político claro imprescindible y acorde a las mejores tradiciones e identidad del Frente Amplio. Todo lo que objetivamente llevó a la caída de su apoyo en la opinión pública a la menor expresión registrada en todo el ciclo progresista, ubicándolo en el entorno del 30%, lejano del 50 y 48% de respaldo ciudadano con los que obtuvimos el gobierno con las mayorías parlamentarias necesarias para impulsar los cambios en beneficio de nuestra gente, que son la razón de ser de nuestro proyecto colectivo, que no es ni

debe ser nunca un proyecto personal o la suma de varios de ellos. La recuperación significativa de los niveles de adhesión al FA una vez conocido el fallo de su Tribunal de Conducta Política, estableciendo con claridad el posicionamiento de la fuerza política sobre estas cuestiones y sus consecuencias inmediatas, confirman la importancia de ese posicionamiento colectivo, y en particular de la decisión adoptada por la Directiva de la Vertiente Artiguista reunida en el departamento de Río Negro que ante la falta de definiciones al respecto tomó la iniciativa estableciendo que “el Frente Amplio como organización política reducto ético de la izquierda, debe reafirmar los lineamientos ético-políticos definidos para nuestra gestión de gobierno y tomar las decisiones que correspondan en relación a eventuales conductas inapropiadas por parte de dirigentes y gobernantes de nuestro Frente Amplio, por dolorosas que éstas puedan ser... y manifestamos la total confianza y absoluto respaldo a la actuación de los compañeros integrantes del Tribunal de Conducta Política”. Posicionamiento inmediatamente respaldado por Tabaré Vázquez, diversos compañeros y compañeras. Los hechos posteriores permitieron avanzar en la resolución de un tema ya laudado por la ciudadanía luego de verificados los acontecimientos públicamente conocidos.

Lamentablemente ni esta postura ni sus consecuencias se verificaron en los casos registrados de denuncias a nivel de gobierno del Partido Nacional en lo departamental, los que si bien no han sido destacados a nivel masivo, no podemos dejar de señalar.

Es lo que hacen las fuerzas políticas y no lo que declaran ante cada situación, lo que definen lo que son.

A nivel interno, otro aspecto importante que debemos superar: la unidad de acción, cimiento fundacional de nuestro Frente Amplio está severamente cuestionada.

En ese sentido reafirmamos la resolución de elevar este tema a consideración de todas y todos los compañeros y organismos del Frente Amplio con vistas de retomar el camino histórico y si fuera necesario, aplicar las mayores sanciones previstas en nuestro Estatuto. En particular, proponemos al Plenario Nacional que el Frente Amplio resuelva que toda compañera o compañero que ocupando cargos electivos vote en contra de una resolución expresa de la Fuerza Política impidiendo con su accionar la concreción de una propuesta y violando el Compromiso Político fundacional del FA se considere autoexcluido del Frente Amplio, privándosele de manera automática del uso del lema al responsable individualmente y al sector político si respaldara dicho accionar.

Necesitamos aprender de todo lo sucedido, tener autocrítica y humildad para superarlo, no reiterar errores ni caer en discusiones ya saldadas, dejar atrás los temas superados, sin ensañamientos personales contra ningún compañero, ni exposición de la fuerza política a reiterar lo que la debilita, priorizando el proyecto colectivo.

Las circunstancias anteriormente mencionadas han significado cuestionamientos en la opinión pública, dificultades en la gestión por la imposibilidad de aprobar medidas de gobierno, pero han tenido como consecuencia mayor junto con la controversia y el desgaste de tiempo y energía, haber contribuido a la configuración del mayor

problema que evidencia nuestra fuerza política y que debemos superar si queremos continuar cambiando el Uruguay: la concentración del Frente Amplio en discusiones internas, con pérdida de iniciativa política y vínculo con la sociedad.

Teniendo importantes propuestas de gobierno, mayoría parlamentaria y un proyecto de cambio a desarrollar, el FA ha estado a la defensiva frente a una oposición política y social activa, con poca capacidad de defensa de nuestra gestión, con escaso ejercicio de polémica, excesivo recurso discursivo a logros del pasado, y lo más grave aún, con incapacidad de imponer una agenda propia, desde la fuerza política o desde el gobierno, centrada en las iniciativas que debemos impulsar para continuar avanzando en nuestro proyecto de desarrollo nacional con justicia social.

El Frente está mirando demasiado hacia adentro y hacia atrás; necesitamos una fuerza política que trabaje hacia afuera con el foco hacia adelante en lo que resta por lograr. Debemos cambiar el posicionamiento pasando de la defensiva a la ofensiva y hacerlo ya.

Para ello, la concreción de iniciativas para lo que resta del período de gobierno, pero sobre todo la definición de la agenda del nuevo gobierno progresista en base a la propuesta de una nueva generación de reformas e iniciativas, y la conformación de alianzas sociales y políticas que las permitan realizar, resulta una cuestión fundamental, y se transforma en la principal tarea a desarrollar.

Promover esta perspectiva política, aportar propuestas para ese nuevo impulso y agenda de cambios, organizar instancias y equipos en esa dirección, y contribuir a la renovación de la propuesta política de la izquierda que le permita concretar una nueva etapa de transformaciones a partir del triunfo electoral, son objetivos políticos prioritarios para la etapa.

Ello requiere una Vertiente Artiguista fortalecida, revitalizada y en movimiento, que recupere su potencial propositivo y renovador.

Vertiente Artiguista Identidad y acción

La Vertiente Artiguista se encuentra en una situación límite como sector. Conserva su potencial humano, el prestigio individual y colectivo de sus integrantes, el reconocimiento de la ciudadanía frenteamplista como frenteamplistas con todo lo que esto implica, y el respeto del sistema político por la capacidad, el rol y los niveles de responsabilidad desempeñados a nivel sectorial y personal por sus militantes, siendo la elección de dos de nuestros compañeros para desempeñar el cargo de Intendente en sus departamentos de los ejemplos más recientes de ello.

A la vez, no tiene presencia en las primeras responsabilidades del gobierno nacional, perdió su representación parlamentaria fruto de un mal resultado electoral nacional, tras ello cual quedó debilitada la identidad del sector (partiendo este proceso de no haber comparecido como tal en la elección), ha perdido incidencia a nivel externo, en

los medios de comunicación, al punto de cuestionarse su existencia en algunos sectores de la población. Todo ello, transforma al período actual y a la próxima instancia electoral en crucial para nuestra existencia sectorial. Cuál de esas dos realidades prevalezca será fruto de nuestro trabajo y sobre todo del nivel de nuestra convicción sobre la vigencia del proyecto, sobre su identidad, su papel a jugar en el proyecto de cambio, en el Frente Amplio y sobre sus posibilidades en el nuevo escenario político y electoral.

La Vertiente Artiguista nació en 1989 como una fuerza política esencialmente frenteamplista contribuyendo al mantenimiento de la unidad del Frente Amplio y su respaldo electoral ante la mayor fractura y crisis de la izquierda nacional. Ese carácter frenteamplista y unitario, así como su apego a los valores fundacionales del FA ha quedado asociado a su identidad, forma parte de su ADN y resulta fundamental en momentos de debilitamiento de vínculos, referencias y lineamientos de acción que están perjudicando al Frente y su accionar, por lo que se deben recuperar. Actitudes políticas como ceder al líder sectorial y principal capital electoral para ser candidato del conjunto con el claro perjuicio y pérdida de respaldo electoral sectorial como hicieron Mariano Arana y la Vertiente en 1994, resultan extraños hoy, donde los principales candidatos comunes del FA han solicitado y mantenido su condición de cabezas de sus listas para su beneficio sectorial.

La Vertiente Artiguista cultivó y desarrolló un perfil de realización de propuestas, elaboración programática y pensamiento en las principales áreas para la transformación profunda del país, articulando una propuesta de desarrollo igualitario que se sintetizó en la idea fuerza de la “modernización solidaria” del Uruguay. Desarrolló un aporte sustancial en la propuesta y elaboración de la renovación ideológica del FA aprobada en su Congreso del año 2001. Avanzado el tiempo y a las puertas del triunfo del gobierno nacional desarrolló las Redes Participar, Programar y Gobernar en torno a ejes programáticos que a la postre constituyeron los “Uruguay” que articularon los ejes del primer gobierno de izquierda en el país, aportando sus principales compañeras y compañeros para los equipos de gobierno. Esa capacidad propositiva aparece como muy importante en momentos en que la oposición acusa a la izquierda de haberse “quedado sin agenda” y fundamentalmente en momentos en que los logros alcanzados por los primeros gobiernos del FA colocan al país en condiciones de concretar un nuevo salto hacia adelante en el proyecto de desarrollo, el que requiere la elaboración de nuevas propuestas y reformas concretas para un nuevo contexto muy distinto al del tiempo fundacional.

La Vertiente apostó desde su fundación a la innovación y la renovación, desde la forma de acción política, tan desacartonada, desacralizada y horizontal como comprometida y responsable, traducida en esa “otra manera de hacer política” que Mariano propuso a la población desde su fundación. Adicionalmente se atrevió con audacia a innovar en la comunicación electoral con protagonistas no políticos primero y animados en otra oportunidad, descontracturando las campañas para siempre.

El “equipo de la Vertiente” se distinguió por su presencia y aporte tanto a nivel de las organizaciones de la sociedad, las bases del Frente Amplio, como a nivel dirigente y de la gestión de gobierno.

Las principales señas de identidad en lo que hace al pensamiento, la conducta y la sensibilidad política permanecen vigentes. También está presente el prestigio del sector en los círculos militantes en las organizaciones sociales y en el Frente Amplio, así como el imaginario colectivo que por los antecedentes señalados ubica a la Vertiente entre los principales sectores históricos del FA, manteniéndose niveles de recordación, lo que contrasta con la escasa presencia pública de los últimos años en el escenario nacional, la disminución en la participación interna y el caudal militante, que es necesario renovar.

Distintos factores parecen indicar que estamos ante una etapa importante para la suerte de la Vertiente en el futuro, reafirmando una u otra de las tendencias vividas.

En la última elección departamental en mayo del año 2015, la 77 obtuvo dos bancas en Montevideo con el liderazgo de Mariano Arana y dos Intendentes Departamentales, en Río Negro y en Paysandú. Ello sucedió, luego de enfrentar en la elección nacional del 2014 (en la que obtuvimos nuestro peor resultado), un escenario de gran competencia electoral en la interna del FA. Esto se dio por el peso de los partidos históricos de la izquierda tradicional, la presencia de los principales referentes de los sectores mayoritarios que polarizaron la interna del FA, y la irrupción de dos figuras de renovación, una compañera y un compañero con sus respectivos sectores que también obtuvieron una importante votación.

En la actualidad, el tiempo en el ejercicio del gobierno y los liderazgos sectoriales comienzan a revelar niveles de desgaste ante la ciudadanía, inclusive en referentes indiscutidos de la izquierda aún protagonistas. Al mismo tiempo, las referidas propuestas electorales innovadoras en la pasada interna, ya no lo son tal y por lo tanto todo indica que, ha aumentado el caudal de votantes indecisos con relación a la adhesión sectorial. A su vez, numerosos ex votantes frenteamplistas se manifiestan “desencantados” y por tanto en duda de votar o no al Frente Amplio, por tanto también en caso de resolver volver a hacerlo se encontrarán a priori, sin pertenencia sectorial.

Ninguno de estos aspectos elimina ni tan solo disimula las dificultades de recursos humanos y materiales de nuestra interna sectorial ni nuestra débil presencia externa, pero objetivamente presentan un nuevo escenario electoral. Historia y presente señalan que están dadas algunas condiciones para un reposicionamiento del sector, no sin dificultades, pero sí con perspectivas objetivas en una suerte de “ventana de oportunidad”. El resultado solo dependerá de nuestro trabajo político.

Cuestión fundamental en todo proceso electoral y en particular en nuestra situación en los últimos procesos, es la política de alianzas. Recientemente hemos reiterado la realización de dos apuestas simultáneas: la conformación de espacios más amplios que el sector a nivel de “Frente” en los cuales confluir con otros y otras; y respaldar figuras

independientes o de otras historias sectoriales tanto a la precandidatura a la presidencia de la república como en la candidatura al senado. Estas apuestas nos han dejado resultados dispares de las cuales es necesario extraer algunos aprendizajes: la importancia de ampliar los espacios de trabajo político con otras y otros compañeros que ensanchen las fronteras militantes y electorales; la importancia de los tiempos (algunos procesos insumieron largas etapas de negociación y energía que acorta el período de campaña electoral); la importancia de mantener la identidad en alguna medida para evitar la confusión del electorado y la pérdida de presencia política; y la importancia de determinar las características, potencia electoral y vínculo futuro con la Vertiente de las figuras no sectoriales a promover.

Un plan político para la etapa supone, como ya se ha expresado, la definición de algunos aspectos fundamentales:

1. Recobrar la existencia política con voz propia en la coyuntura y de cara al ciclo electoral que se traduzca en la obtención de representación parlamentaria, lo cual supone formar y expresar públicamente opinión sobre los acontecimientos de coyuntura, formular iniciativas y planteos propios, realizar instancias públicas convocando a la prensa, en particular con presencia de nuestros compañeros intendentes, etc.
2. Ampliar los niveles de participación y organización en torno a una propuesta política, lo que supone fortalecer o constituir equipos de trabajo: uno con los responsables de áreas claves a nivel operativo central (organización, comunicaciones y finanzas) y áreas de trabajo sectoriales como los jóvenes, territoriales como Montevideo e Interior, o temáticas como Diversidad y Género, ejes programáticos, etc. Y a su vez, realizar instancias de convocatoria amplia como el Congreso y retomar la realización de Asambleas Nacionales como espacio abierto de participación de nuevos compañeros y compañeras;
3. Definir una estrategia de acumulación electoral –incluyendo la realización o no de alianzas- y un plan de actividades cuanto antes, para compensar con tiempo de trabajo, acumulación y novedad el diferencial de recursos de otras propuestas;
4. Contribuir decididamente al fortalecimiento de la unidad de acción del Frente Amplio, a la gestión de nuestros gobiernos-nacional y departamentales-, y a la elaboración programática de cara al cuarto período progresista en el Uruguay.
5. Renovar el sector político, entendiendo que renovación significa renovación en ideas, en cómo plantearlas, en cómo trabajar en unidad, en cómo adaptarlas a la actualidad sin perder el rumbo de construir una sociedad más justa.
6. Fortalecer los lazos entre la fuerza política y los movimientos sociales.
7. Establecer una propuesta programática marco: nuevo impulso de reformas y ejes programáticos para el cuarto gobierno progresista, articulando espacios de trabajo e instancias de debate y participación abierta en torno a ellos.

De cara a esta última tarea se presenta un esbozo a continuación, el cual se nutre de informaciones oficiales elaboradas por nuestro gobierno nacional en función a lo

realizado, de análisis y documentos presentados por los compañeros José Bayardi y Enrique Rubio.

El país que cambiamos

Valorar las transformaciones realizadas en los gobiernos frenteamplistas desde 2005 constituye un punto de partida fundamental para diseñar y llevar adelante los nuevos cambios que queremos.

La economía uruguaya acumula 15 años de crecimiento ininterrumpido, lo que constituye el período de expansión económica más largo de nuestra historia. Verificó un crecimiento del PIB de 2,7% en 2017, en relación a 2016. La proyección actualizada de crecimiento para 2018 es de 2,5%, para 2019 algo superior al 3% y se estima volverá a crecer en línea con su tendencia de largo plazo en el entorno del 3,0% a partir de 2020.

A su vez, a diferencia de períodos pasados de crecimiento económico sin que el mismo se tradujera en mejoras de las condiciones de vida de la población, desde la llegada al gobierno del Frente Amplio se registra una mejora sustantiva en la calidad de vida de la población, registrada en la evolución de los distintos indicadores sociales. En este sentido, entre el primer trimestre de 2006 e igual trimestre de 2018 el ingreso de los hogares se incrementó 48% en términos reales, lo cual se explica por el comportamiento del mercado laboral, y por políticas sociales que operaron aumentando los ingresos de los hogares. Este crecimiento sostenido en materia de ingresos reales, y en particular de aquellos hogares de ingresos más bajos, destacándose que los ingresos de los hogares del 10% más pobre de la población creció un 113% en términos reales entre 2006 y 2017, mientras que los del 10% con mayores ingresos lo hicieron 31%.

La pobreza de las personas disminuyó del 32,5% en 2006 a 7,9% en 2017 en todo el país. Ello significa que mientras que en el año 2006, de cada 1.000 personas 325 no superaban el ingreso mínimo para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, en 2017 este número de personas desciende a 79. Cuantificado por hogares las cifras evidencian que a poco más de 10 años de gobierno progresista en el país los hogares pobres descendieron sustancialmente alcanzando en 2017 el 5,2 % contra el 24,2% de 2006, de acuerdo a registros con igual metodología disponibles desde esa fecha, estimándose que los niveles de pobreza en el país eran superiores aún a inicios de 2005 cuando dejaron el gobierno los partidos tradicionales. Por otra parte, la indigencia, es decir, el porcentaje de personas que no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas, también descendió drásticamente: en 2006 ascendía a 2,5% y pasó a 0,1% en 2017

En relación al avance en la disminución de la desigualdad en la sociedad, es decir, en la redistribución de la riqueza, podemos afirmar que como consecuencia de las políticas de inclusión social y de redistribución del ingreso implementadas desde 2005, el

crecimiento económico de los últimos años fue acompañado por una marcada reversión de los procesos de concentración del ingreso, medido por el índice de Gini. Otra forma de ver cómo ha evolucionado la desigualdad de ingresos es comparar el crecimiento que ha tenido el ingreso medio de aquellas personas ubicadas en el primer decil de ingresos respecto del ingreso medio de aquellos ubicados en el último decil. Mientras que en el 2006 los hogares del décimo decil ganaban casi 18 veces más que los hogares del primer decil, en el año 2017 esa relación descendió a 11 veces. En una primera etapa, la mejora en la redistribución del ingreso estuvo explicada por las políticas dirigidas a atender la emergencia social a través del Plan de Emergencia Social (PANES), el cual tuvo un efecto directo sobre los ingresos de las personas que pertenecían a los deciles más bajos. A partir de 2008 se deben atribuir a la implementación de políticas más permanentes como el Plan de Equidad y la creación de las nuevas asignaciones familiares y la Asistencia a la Vejez, la Reforma Tributaria, la Reforma de la Salud, y los aumentos de los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas dados. Los ingresos laborales crecieron fuertemente en términos reales entre 2004 y 2017, concentrándose principalmente en los sectores más bajos. Este crecimiento obedece tanto al dinamismo de la actividad económica que permitió un aumento del empleo, como a la recuperación de los salarios nominales impulsados a través de la política salarial del gobierno de incremento del salario mínimo, de incrementos diferenciales para los salarios más sumergidos y las negociaciones colectivas en general en el ámbito de los Consejos de Salarios.

Por destacar de entre todas ellas resultados concretos de algunas de estas políticas, se debe mencionar el nivel de mejora salarial, el impacto del período progresista en el nivel de ingreso de personas y hogares, así como su contraste con el período anterior. Mientras en los 20 años posteriores a la dictadura desde 1985 a 2004 hubo aumentos de salarios reales del 4%, en los 12 años de gobiernos del Frente Amplio el incremento fue de 51%. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti post dictadura el salario real creció 26%, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle creció 2%, en el segundo período de Sanguinetti 1%, en el de Jorge Batlle se produjo una pérdida del 20% y en los gobiernos del FA hasta el momento un aumento de 51%.

A su vez, por su impacto en la calidad de vida de la población se destaca el avance en el acceso a los servicios de salud. Los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud más que se triplicaron en el período 2007-2017, pasando de 748.821 en diciembre de 2007 a 2.545.465 en diciembre de 2017. De esta forma, la cobertura en salud a través del SNS pasó del 22% de la población en 2007 al 73% en 2017. A todo ello se suma la magnitud de la realizado en las otras áreas que impactan en la mejora de la calidad de vida de la población, lo que puede representarse en el aumento de un 137% registrado de 2005 a la fecha en los recursos destinados a Educación, Salud, Seguridad y Asistencia Social, Vivienda y Servicios Comunitarios, así como Cultura y Deporte, considerados globalmente como gasto público social. Todo lo cual ha sido posible y se ha acompañado por las políticas que apuntalaron el crecimiento económico, la mejoras en la infraestructura –en particular en energía y comunicaciones- y la mejora en la inserción internacional del país.

No obstante ello, la relevancia de los logros alcanzados no debe distraernos de nuestro desafío fundamental que es construir sobre esa base un proyecto país con mayor desarrollo y bienestar para la población, atendiendo a los desafíos y oportunidades que plantean al Uruguay, tanto la coyuntura como la nueva etapa histórica que atraviesa la humanidad.

En relación a lo primero, digamos que a los aspectos geopolíticos ya señalados, debemos agregar que el escenario macroeconómico global y regional ha tenido cambios relevantes. Se han registrado datos como un mayor proteccionismo en algunos países desarrollados, un fortalecimiento del dólar a nivel global, el aumento de más de 50% en el precio del petróleo, se han enlentecido los flujos de capitales a las economías emergentes, se manifestaron las dificultades que atraviesan las economías de Argentina y Brasil, caracterizadas por niveles de déficit fiscal y trayectorias de endeudamiento insostenibles por periodos prolongados de tiempo, a lo que se suma un déficit significativo también de la cuenta corriente en el caso de Argentina que ha decidido recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de obtener un préstamo que le permita al país cumplir con sus necesidades de financiamiento y recuperar la confianza de los agentes privados.

En ese marco Uruguay también presenta importantes desafíos macroeconómicos. En un contexto de escenario internacional más adverso en cuanto a los costos de financiamiento externo y más incierto en lo que refiere al mantenimiento del ritmo de recuperación de las economías regionales, a pesar del mayor ritmo de actividad que mostró la economía en 2017 el empleo y la inversión no han logrado despegar, acumulando en ambos casos cuatro años de caída ininterrumpida, y el déficit fiscal del Sector Público Consolidado cerró 2017 en 3,5% del PIB.

El Nuevo Impulso progresista y las Nuevas Reformas

Replantear el proyecto país

Tan importante como las transformaciones realizadas resultan las tendencias, oportunidades y desafíos que plantea el nuevo mundo que vivimos por los cambios operados a nivel estructural por la revolución tecnológica y las transformaciones ocurridas y en curso a nivel económico, social y cultural.

Uruguay necesita un nuevo impulso progresista sustentado en una nueva generación de reformas, iniciativas y políticas, que nos permitan avanzar a partir de lo alcanzado en los primeros tres gobiernos progresistas.

El Frente Amplio debe asumir el desarrollo y presentación a la ciudadanía de la nueva agenda de cambios que el país necesita para continuar avanzando hacia el desarrollo con igualdad que es la esencia de nuestro proyecto histórico y programa. Ello supone ubicar en segundo plano la referencia a los logros obtenidos en nuestras anteriores gestiones, aunque estos son muchos, significativos y constituyen el punto de partida imprescindible para concretar el nuevo impulso de cambios que queremos.

Nuestra propuesta país y nuestra campaña debe estar centrada en el futuro, no en el pasado. Debe ser capaz de convocar, comprometer y motivar a la gran mayoría de

uruguayas y uruguayos a emprender juntos una nueva generación de reformas que nos permita concretar un nuevo salto hacia adelante en el camino de progreso iniciado en 2005. Ello supone emprender la construcción de una alianza social para los cambios integrada por ciudadanas y ciudadanos, sectores sociales y económicos, de la academia y de la cultura, con la mayor amplitud. Supone también ubicarse en una nueva realidad, partir de lo alcanzado y asumir las oportunidades y amenazas de un contexto que de cara al cuarto período progresista, se presenta distinto al de entonces y nos plantea nuevos desafíos.

En este marco es preciso esbozar algunos lineamientos de un nuevo proyecto país o de un nuevo plan estratégico de cambios. En 2020 ya habrán transcurrido quince años de transformaciones profundas e incesantes. Se requiere innovar. Como ha escrito Gerardo Caetano, “Una izquierda transformadora que se detiene «a mitad del camino» deriva a menudo en políticas de conservación encubiertas, en partidos de Estado preocupados fundamentalmente por no perder el poder”

En ese sentido, en línea con el planteo realizado por Enrique Rubio en uno de sus últimos trabajos, debemos plantearnos avanzar en distintas direcciones: la diversificación de la matriz productiva, la inversión en infraestructuras físicas con importante sustento ecológico, el desarrollo audaz de la política de innovación, la superación de las dificultades para la transformación educativa y la transformación democrática del Estado (que avanzó en la primera administración progresista y luego se detuvo, con algunas salvedades puntuales), la inserción regional e internacional, y la persecución de nuevas fronteras para las políticas sociales que traduzcan todo ello en un beneficio concreto y palpable para la población, mejorando los niveles de vida del conjunto y avanzando en la concreción de la igualdad de oportunidades para todas y todos, disminuyendo gradualmente los niveles de desigualdad, la discriminación y las injusticias de diverso tipo en nuestra sociedad, objetivo último de nuestro proyecto.

“Estas direcciones u orientaciones deben armonizar entre sí e inscribirse en un plan estratégico más global. Ellas incluyen, a nuestro juicio, los principales puntos críticos para avanzar en desarrollo, ecología, educación, calidad del Estado, justicia, seguridad, igualdad y libertad. A su vez, para ser viables, las mismas implican un poderoso sustento sociopolítico y comunicacional y la incorporación de un “sentido común” en nuestra población con la misma orientación y sentido.

Es necesario diversificar la estructura económica. Superar lo que Cepal llama la “heterogeneidad estructural”, o sea la coexistencia de sectores avanzados y atrasados, del trabajo de calidad con la exclusión social, de ganadores y perdedores, de economías con importante primarización y vulnerabilidad externa. Para lograrlo se necesitan políticas productivas que prioricen sectores estratégicos. Los estudios para identificar y priorizar dichos complejos productivos estratégicos están hechos desde hace varios años. En ellos participaron políticos, técnicos, académicos, actores sociales, de distintos ministerios y fundamentalmente de la OPP y el MIEE, desde 2007 en adelante. Pero han faltado políticas públicas vigorosas que instrumenten esta priorización. Este desafío deberá ser afrontado en el próximo gobierno progresista. En ello nos va la vida como país y sociedad.

Es preciso incorporarse a la revolución tecnológica –principalmente de la bioeconomía– para diversificar la matriz productiva. Asumir con audacia el desafío de la innovación como condición de lo anterior. Avanzar en educación como clave del desarrollo humano y en la transformación democrática del Estado. Desarrollar las plataformas e infraestructuras físicas, respetando y revirtiendo los impactos ecológicos. Insertar internacionalmente al país por la vía de nuevas aperturas reguladas y pactadas. Participar en las disputas pro hegemónicas por los sistemas de valores, en las nuevas formas de comunicación y socialización, y en las nuevas experiencias de los movimientos sociales, vinculando principalmente luchas emancipatorias con nuevas características e integración social.”

Es necesario a su vez avanzar en la profundización de los niveles de igualdad en la sociedad y en su transformación cultural, desarrollando una nueva sensibilidad en el relacionamiento entre las personas, con su entorno, así como el cambio del paradigma cultural de nuestro vínculo con los animales. Garantizar la igualdad formal de todas las personas en el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos refiere a la plena titularidad y goce de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las personas; independientemente de su situación socioeconómica, sexo, ascendencia étnico racial, identidad sexual y de género, edad, religión, origen, u otra condición, así como a la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo. Para ello se necesita una efectiva pertenencia a la sociedad y participación en la toma de decisiones. Pero a su vez debemos garantizar la igualdad sustantiva, que se entiende como el cierre de la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real, que implica el desarrollo de mecanismos específicos para la realización progresiva de los derechos, asegurando la movilización de los recursos disponibles para garantizar el ejercicio de éstos, así como la diligencia debida para impedir la discriminación y la violación de derechos por parte de actores públicos o privados. Impulsar la transformación cultural y una nueva sensibilidad de relacionamiento entre las personas supone cuestionar el individualismo, el consumismo, la cultura patriarcal, el machismo, el racismo, la homofobia, y cultivar una cultura con lógicas de convivencia sustentadas en valores humanos, la cooperación y la solidaridad en la diversidad.

La profundización de la democracia es un objetivo central de nuestro proyecto. Democratización del Estado, de la política y de su relación con la gente.

La participación de las personas y colectivos en la vida social y política de nuestro país es esencial para el fortalecimiento y desarrollo de nuestra democracia. A ésta la entendemos como la constante resolución de tensiones y construcción colectiva de acuerdos en temas complejos, aceptando visiones e intereses distintos e incluso contradictorios.

La participación no es sólo un objetivo sino una forma de hacer política. No retrocede ante la complejidad que plantea un mundo siempre cambiante, ni ante las dificultades de acceso a la información y formación necesarias para interpretarlo. De esta forma ir encontrando caminos comunitarios de resolución de los desafíos.

La participación es un proceso de construcción colectiva. Implica generar espacios de participación con real incidencia en los temas que se tratan, con capacidad de análisis y síntesis de los problemas y con la integración de la mayor cantidad de los interesados posible.

Una acción política que se diga respetuosa de la dignidad de las personas sin un trabajo sostenido y consecuente de promoción de la participación es de muy corto alcance, pues rápidamente reproduce, con nuevos ropajes, las lógicas de poder y exclusión dominantes.

El desarrollo de este programa y esta nueva agenda de transformaciones, avances y reformas, así como su difusión e involucramiento de la militancia y la ciudadanía en su elaboración, impulso e implementación, debe ocuparnos de modo prioritario en la etapa.

En ese sentido, además de la profundización del trabajo en los ámbitos comunes a nivel de Programa del Frente Amplio, resulta conveniente impulsar una agenda de trabajo propio con la conformación de equipos e instancias de participación abiertas en ciclo sobre “Las Nuevas Reformas” convocadas para avanzar en esta dirección,

Se plantea organizar el trabajo en torno a ejes (los que se proponen u otros) que permitan articular aportes e incorporaciones, y fundamentalmente alcanzar productos que constituyan insumos para las futuras administraciones progresistas.

Los ejes propuestos son:

El Desarrollo Sostenible

- El Camino al Desarrollo
Uruguay en la revolución tecnológica y la bioeconomía.
- Infraestructura para el desarrollo
Obras y proyectos claves para el Uruguay de 2030
- Empresas públicas como motor transformador y transformación democrática del Estado
- Uruguay Sustentable: la prioridad ambiental
Cambio climático, producción, energía y mucho más.

Justicia Social y Equidad

- Protección y desarrollo social en claves de igualdad
La nueva frontera en las políticas sociales progresistas. El énfasis en la atención a la primera infancia.
- Agenda de derechos y nueva sensibilidad:
Género, equidad étnico-racial, diversidad sexual

- Políticas Culturales y de Deporte.
Retomar su prioridad como identidad del proyecto progresista
- Educación: recursos y transformación
De los bloqueos al consenso
- Salud
La segunda reforma: descentralización del primer nivel de atención y desarrollo de la participación de los actores.

Profundización de la democracia

- Derechos Humanos, Memoria, Verdad, Justicia
Nunca más Terrorismo de Estado
- Del centralismo al crecimiento del interior
Producción, Empleo, Educación, Ordenamiento Territorial y Descentralización,
- Más Seguridad, combate al narcotráfico, mejor convivencia.
Prioridades y desafíos para mejorar una cuestión central.
- Los desafíos de las nuevas formas de comunicación.
Nuevos y viejos medios. Democratización, desinformación, manipulación. Subjetividad y relaciones humanas.

Este documento constituye además de un material de trabajo de cara a las instancias internas que tiene por delante nuestra organización, un aporte para compartir con todas y todos aquellos, compañeros y compañeras, frenteamplistas viejos o nuevos, que valorando lo alcanzado hasta ahora, no estén dispuestos a dejarlo perder en una improvisada vuelta al pasado o marcha atrás... y que, sobre todo, crean que podemos y debemos hacer más.

Octubre 2018